



UMC
UNIVERSIDAD
MIGUEL DE CERVANTES

**EL HUMANISMO CRISTIANO Y LA
RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA**
Josep Durán i Lleida. Abogado español, Ex
Diputado y Eurodiputado por Cataluña. Ex
Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
de Las Cortes de España

EL HUMANISMO CRISTIANO Y LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Permítanme que empiece por lo que debería ser la conclusión y síntesis de mi intervención, aunque más o menos ya se contiene en su propio título. Creo que todos los presentes podemos compartir la sensación, prácticamente la certeza, de que hoy en día asistimos a un debilitamiento generalizado de los sistemas democráticos. El individualismo, la pérdida de sentido comunitario, el peso de los supuestos condicionantes económicos, la propensión a buscar soluciones autoritarias, la pérdida de consensos y de espacios de diálogo y de encuentro, todo ello nos está conduciendo a nuevos escenarios en los que las democracias pierden intensidad y, en la práctica, se convierten en simples coartadas electorales para toda suerte de nuevos despotismos. Tendremos ocasión de ir desgranando esta situación y sus causas, pero podemos convenir que la fotografía actual de las democracias no resulta halagüeña.

Si coincidimos en esa premisa, es obvio que, como demócratas, nos inquiete esa corrosión de un sistema que, pese a los defectos inherentes a cualquier construcción humana, constituye la mejor fórmula de organización política para fomentar la libertad, la responsabilidad, la búsqueda del bien común, la protección de las minorías y la garantía de los derechos humanos. Recordando la tan manida frase de Churchill, puede que la democracia sea el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, pero siempre con excepción de todos los demás. Y puesto que nos inquieta su proceso de deterioro, es lógico que aspiremos a su restablecimiento, a devolver al enfermo no sólo la salud perdida sino incluso un sistema de defensas que garantice su óptimo desarrollo y una muy dilatada esperanza de vida.

Ni el diagnóstico es sencillo ni el tratamiento es fácil. Pero si la democracia se degrada por el progresivo individualismo, por el despotismo del mercado, por la fragmentación social y la deriva autoritaria, es lógico que intentemos recuperarla mediante la superación de estos factores de desgaste. Y la única solución que podemos entrever no es otra que la reintroducción de los valores y de los principios en la vida política.

Ciertamente, los valores que pueden fortalecer una democracia no son patrimonio exclusivo de ningún credo ni de ningún sistema ideológico. Cualquier ideología que aspire al bien común y que respete la dignidad y la libertad humana puede realizar aportaciones esenciales e imprescindibles para la democracia. Pero, sin ánimo de monopolio alguno, es lícito considerar que el humanismo cristiano democrático hoy en día, por su defensa de los valores del respeto a la persona y a su dignidad, por su aspiración al bien común, por su afán de centralidad y de sumar esfuerzos, por su vocación de política respetuosa, constructiva y al servicio de las personas y de la comunidad... contribuye a constatar en nuestra concepción política la existencia de unas herramientas útiles para restablecer la

confianza perdida en la democracia y para luchar por una sociedad mejor, más justa, más libre y más solidaria.

Como les decía, los sistemas democráticos han experimentado un retroceso cualitativo innegable. Día a día, en los noticiarios, en los periódicos, se publican de manera constante actuaciones de líderes elegidos mediante sufragio que sonrojan. Semanas atrás, por recurrir a un simple ejemplo, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, en un discurso pronunciado en Manila y luego difundido por escrito por la propia oficina presidencial, animaba a sus ciudadanos a matar a los obispos católicos. Sus palabras fueron muy claras: "Vuestros obispos, matadlos. Esos bastardos no sirven para nada. Lo único que hacen es criticar". No se trata de alguien que haya alcanzado el poder mediante un levantamiento militar, sino que Duterte se impuso en las elecciones presidenciales de mayo de 2016 con casi el 40% del voto emitido. Y sus manifestaciones contra la jerarquía católica tienen lugar en un país en que se calcula que el 85% de sus ciudadanos son católicos.

Podríamos invocar muchos ejemplos más o menos parecidos, tal vez no tan contundentes, pero no menos peligrosos. Son muchos los países que están emprendiendo, aún bajo la apariencia de formas democráticas y electorales, una deriva autoritaria innegable. Hoy en día podríamos coincidir en que la democracia está retrocediendo en Brasil, en Turquía, en Rusia o en la India. En la misma Europa, incluso en la Europa comunitaria, el germen del autoritarismo y de la regresión se expande, con distintas intensidades, en Polonia, Hungría, Lituania o Eslovaquia. Y, aunque me resulte doloroso reconocerlo como ciudadano español, también en España están apareciendo formaciones cuyo programa electoral dista mucho de aspirar al bien común y de centrarse en el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas y los pueblos.

El deterioro de la democracia tiene, obviamente, causas complejas. Cada analista, cada pensador, expone de manera razonada su diagnóstico. Es complejo, sin duda, determinar por qué motivos la democracia se pervierte y deteriora. En cierta manera, ya lo predijo hace casi doscientos años Alexis de Tocqueville, cuando manifestó que la democracia podría verse adulterada por un cierto tipo de despotismo al que calificó de suave. Para el autor, la democracia exige saber sobreponerse a las situaciones transitorias y a las tensiones, a la tentación de la inmediatez. En una célebre paradoja, nos alertaba del hecho que las virtudes de la libertad sólo se perciben a largo plazo, pero sus defectos son fácilmente perceptibles de inmediato. Mientras que, contrariamente, los vicios o defectos de la tiranía sólo se perciben a base de tiempo, mientras que sus hipotéticas virtudes – llamémoslas así—como el orden o la disciplina resultan visibles de inmediato.

Pero difícilmente podía percibir el "despotismo suave" e imperceptible a que nos ha conducido la situación actual. Con las revoluciones liberales y el

ensanchamiento del parlamentarismo, parecía que un régimen basado en la libertad y en la contraposición de poderes debería de ser el remedio contra cualquier situación de tiranía, contra cualquier dictadura, fuese del sentido que fuese y que el destino de cualquier democracia no podría ser jamás otro que su fortalecimiento progresivo. No ha sido así. Se ha perdido el doble impulso que alentaba las transformaciones y las sucesivas conquistas sociales y de libertad. Por un lado, ha desaparecido esa conciencia de comunidad, de grupo cohesionado, que generaba solidaridad entre las personas y que permitía entender como un deber ineludible la lucha por el bien común. La política democrática consistía en trabajar a favor de una mayor cohesión del “demos” y en pro de una mayor solidaridad entre las personas. Los derechos humanos individuales sólo podían entenderse –mirando el transcurso histórico—como una primera etapa para la futura consecución de los derechos y libertades sociales y económicos y, obviamente, para la consecución de los derechos y libertades de los pueblos y de las minorías.

Sin embargo, las crisis económicas, la eclosión de las nuevas tecnologías y, sobre todo, el creciente individualismo, han contribuido a la pérdida de la idea de comunidad. La persona ha dejado de ser una parte de la comunidad y se ha convertido en individuo aislado, fácil de manipular, preocupado sólo por su interés y su bienestar. Incluso las formas de ocio se han compartimentado a favor de lo individual, de la relación con la pantalla del móvil. Todo se ha convertido en instantáneo, en inmediato; todo se mide por el beneficio que reporta ya mismo, sin ninguna estrategia a largo plazo y, menos aún, sin un sentido de responsabilidad colectiva de lo que hacemos. Se trata, es evidente, de un análisis muy simplificado, casi simplista, pero que nos permite constatar que la pérdida de sentido comunitario ha contribuido a debilitar la legitimidad del “demos” entendido como comunidad y fundamento de la democracia. Si no me interesa lo que le suceda a mi vecino; si me preocupa poco que en mi ciudad existan personas sin los recursos mínimos; si no me preocupa lo pueda suceder a cien kilómetros de casa, o el bienestar de los ancianos, de los desempleados, de los hijos de familias desestructuradas ¿qué fundamento tiene la democracia?

El segundo factor de deterioro democracia radica, precisamente, en la sensación de inutilidad de la misma frente a las supuestas leyes del mercado. Cuando la campaña electoral de Bill Clinton popularizó la célebre frase de “es la economía, estúpido”, consiguió debilitar la posición de un presidente Bush en altas cimas de popularidad, pero también estaba reconociendo que existían unas leyes invisibles que se imponían a la voluntad de los electores y a las leyes escritas de los parlamentos. Aquello sólo era el inicio de lo que se avecinaba: la crisis económica de los noventa y, mucho más intensamente, la que se inició en 2007-2008 y ha durado prácticamente hasta nuestros días, ambas han demostrado que los derechos sociales y económicos eran mucho más frágiles de lo previsto. La crisis podía dejar sin empleo ni recursos a legiones de trabajadores, hundir ciudades enteras como Detroit o países como Grecia, y justificar todo tipo de recortes con el

argumento de que tales restricciones sociales resultaban imprescindibles para una futura e hipotética recuperación. El ciudadano que perdió su empleo, su subsidio e incluso su hogar, aprendió rápido a desconfiar de las virtudes de la democracia porque ésta se iba sometiendo cada vez más a oscuros mandatos que nadie sabía exactamente de dónde provenían. Los políticos ya no eran vistos como los representantes de los ciudadanos sino como simples títeres cuya única función era ejecutar de manera automática las órdenes de no se sabe qué oscuros comités mundiales en que se decidía la suerte de países y de sociedades enteras. La democracia y la voluntad popular habían dejado de ser no sólo los autores de las leyes sino también, y peor aún, habían dejado de ser la garantía de los débiles frente a los abusos de no se sabe quién.

Las consecuencias han sido letales en la percepción cívica de la democracia. No es extraño, pues, que, ante esa deriva, los defectos de la democracia a que aludía Tocqueville aparezcan de manera inmediata. También cabe añadir, como tercer factor coadyuvante, la supuesta escasa moralidad de algunos políticos y partidos. No se trata de flagelarnos ni de considerar que todos los políticos son malvados ni que todas sus acciones son malévolas. En absoluto. La democracia ha dado ejemplos de políticos capaces de un extraordinario sentido de liderazgo ético. Baste aludir, por ejemplo, a políticos como Nelson Mandela, John Fitzgerald Kennedy, Vaclav Havel o los chilenos Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin o Eduardo Frei Ruiz-Tagle y muchos otros, que han acreditado que la democracia y los derechos humanos son la primera y más sólida garantía de la paz y de la convivencia en libertad. Baste también considerar la capacidad de visión a largo plazo de la que hicieron gala políticos como Adenauer o De Gasperi, (de ambos hable hace un par de años en este mismo encuentro internacional que lleva el nombre de nuestro querido y añorado amigo Oswaldo Paya) capaces de sobreponerse a la tragedia de dos guerras mundiales fratricidas para crear, por encima de los inevitables resentimientos, las bases de una Europa unida en la cual resultase imposible otra conflagración entre pueblos hermanos. La política y los políticos han proporcionado infinitos ejemplos de vocación de servicio público, de lealtad cívica, de compromiso social y comunitario y, cuando además de políticos se han erigido en líderes, han sabido impulsar sus naciones hacia altísimas cotas de libertad.

Pero lo cierto es que, en la situación actual, los políticos se han alejado de la voluntad de consenso que hace posibles los grandes logros. Si la sociedad se ha convertido en un agregado de individuos sólo preocupados por el corto plazo, los políticos han seguido una vía similar, porque, en definitiva, suelen ser el reflejo de sus respectivas sociedades. Así, de la misma manera que se ha perdido el sentido comunitario, también la política ha dejado de ser el lugar en que se construían consensos y debatían proyectos. Si antes la teoría política afirmaba que en cualquier sistema más o menos bipartidista, los dos grandes partidos dominantes se desplazarían necesariamente hacia el centro y resultarían cada vez más parecidos, ahora, en la práctica, los partidos tienden a radicalizarse, a situarse en

posiciones extremas, desde las cuales el “adversario” político se convierte en el enemigo a descalificar y a destruir.

No es una afirmación baladí. Por ejemplo, en muchos de sus mítines, en sus arengas a sus fieles, el presidente Trump suele incluir el mensaje de que su antigua rival, Hillary Clinton, es una corrupta que ha de acabar sus días en la cárcel. Con esas proclamas —y hablaremos de ello— la política deja de ser el lugar de encuentro de las distintas propuestas para convertirse en un ring, en un campo de batalla en el que los ciudadanos se convierten en hinchas, en hooligans enardecidos. Los discrepantes, las minorías, los que piensan distinto ya no son seres humanos con los que dialogar y entenderse sino enemigos a los que abatir.

Y esa práctica nefasta repercute en un mayor descrédito cívico de la política. Si unos políticos descalifican a los otros políticos, si todos tachan a los restantes políticos de corruptos e imbéciles, ¿quién puede confiar en la política y en los políticos?

Si, además, los medios de comunicación —a menudo una pieza más en el tablero del juego político— pierden cualquier exigencia de rigor y se dedican a airear y exagerar los supuestos casos de corrupción de los partidos contrarios, si toda la prensa televisada o escrita deviene un cúmulo de casos de corrupción, o por Internet aparecen publicadas todo tipo de noticias, a menudo falsas, que pervierten y denigran la actividad política, lo lógico es que los ciudadanos confíen cada vez menos no ya en la política, sino en la democracia.

Habíamos considerado siempre que la democracia, con sus “cheks and balances” era una forma de gobierno en que los ciudadanos podían controlar sus instituciones. Sin embargo, en nuestros días, esta premisa ha dejado de ser cierta, no sólo por la decantación autoritaria que experimentan muchas supuestas democracias sino también por algo que no contemplaban los expertos en teoría política, y que consiste en el hecho de que la propia sociedad ha dejado de ser un único “demos” para convertirse en el campo de batalla entre mayorías y minorías. Si la aparición de partidos autoritarios o claramente fascistas --explícitamente contrarios algunos de ellos a los más elementales derechos humanos— era una cosa extraña e irrelevante, que no pervertía los fundamentos del sistema, ahora esos partidos se ven aupados por un elevado número de votantes, que buscan en esas soluciones autoritarias las rápidas ventajas de la tiranía a las que antes aludíamos en la referencia a Tocqueville.

Es decir, la democracia se ha deteriorado por los defectos de sus dirigentes, pero también ha entrado en decadencia por la fragmentación social y el individualismo que ha ido impregnando la forma de ser de los ciudadanos. Todos aquellos sistemas de control arbitrados para que ninguno de los distintos poderes se

sobrepusiera a los demás, no han sido útiles para evitar el progresivo desapego de los ciudadanos respecto de sus instituciones. Es más, en cierto modo, nos hallamos ante un proceso que se retroalimenta constantemente: ante el descrédito de las instituciones, los ciudadanos se instalan en posiciones radicalizadas y dicotómicas, en que todo es blanco o negro; en la que la culpa de todos los males es de los emigrantes o de quienes hablan otro idioma, profesan otra religión o, sencillamente, opinan de manera distinta. Si hemos perdido el empleo, la culpa es del inmigrante ilegal; si se recortan las inversiones sociales, la culpa es de todo ese atajo de inmigrantes y de holgazanes pobres que se han acostumbrado a vivir de las ayudas públicas; si la sanidad colapsa, es por el uso que hacen de ella los recién llegados o quienes no cotizan. O, en el mejor de los casos, la culpa también es de los políticos de siempre, que roban a manos llenas. Ante discursos similares, la democracia se halla indefensa, y también necesita ser protegida de la ferocidad de sus propios ciudadanos.

La práctica política debería haber garantizado los necesarios cortafuegos ante estas situaciones de crisis. No ha sido así. Muy al contrario, en lugar de invertir en educación o en formación cívica, se ha buscado actuar mediante inversiones faraónicas que permitían inaugurar aeropuertos o carreteras, siempre visibles y tangibles a corto plazo, a veces necesarios, pero que han sustituido la inversión en aquellos bienes intangibles como educación o cultura que garantizan el gusto por la democracia y la calidad de la convivencia. Si el votante sólo busca su propio interés, si ha perdido cualquier noción de comunidad y si cree que todas las demás personas son su enemigo y su competidor, es obvio que difícilmente se someterá a reglas claras y concisas de decisión democrática. Si se puede subvertir el sistema a favor de los propios intereses, ¿por qué no hacerlo? Si existen líderes que prometen acabar con los abusos de los políticos corruptos e incluso zurrar a todos los indeseables que discrepan de aquello que pensamos, ¿por qué no votarlos? Si los obispos católicos critican al presidente del país, ¿por qué no disparar contra ellos y matarlos?

Esos intangibles de la democracia son los que garantizan el rigor y la autocensura constructiva en la prensa, la libertad de expresión o la capacidad de discrepar ante el poder político. En síntesis, esos intangibles garantizan no sólo la solidaridad entre las personas y los grupos, sino la básica protección de los derechos y las libertades de las minorías. Y sin esos intangibles, nos hemos ido convirtiendo en frágiles individuos manipulables, que se sienten desorientados e indefensos ante la corrupción de sus dirigentes, la desigualdad creciente, la volatilidad de su bienestar y la erosión de la seguridad y el orden. Y como es fácil de deducir, la corrupción de los dirigentes convierte el sistema en odioso y arrebató a los representantes cualquier atisbo de legitimidad; la desigualdad atomiza el sentido de pertenencia al grupo, y la pérdida de la seguridad y del orden desata los instintos más primarios y autoritarios de cada cual.

Esa desazón y ese descrédito conducen a la necesidad de un líder providencial, de un hombre fuerte, de un “caudillo” que acabe con los males de la democracia, restablezca el orden y otorgue seguridad a los grupos mayoritarios que se sienten amenazados. Es la célebre “deriva autoritaria”, expresión que se ha convertido en un mantra de nuestros días y en una constatación en numerosos países.

Pero estos nuevos líderes no acceden al poder mediante pronunciamientos ni golpes de estado, sino mayoritariamente a través de las urnas. El proceso democrático sirve para auparles al poder pero luego ellos mismos se encargan de desactivar cualquier sistema de control de sus acciones y cualquier posibilidad de legítimo cambio democrático en sucesivos procesos electorales. La prohibición de partidos y la alteración de las reglas más elementales de garantía democrática son constantes. Y no me refiero a lo que pueda suceder en Turquía después del supuesto golpe de estado contra Erdogan, o en Egipto, sino de lo que está sucediendo ahora mismo en países que han liderado los avances democráticos desde siglos atrás.

Quiero, en este momento, abrir un paréntesis para hacer referencia a España. Posiblemente Ustedes hayan oído o leído declaraciones de dirigentes independentistas catalanes criticando a las Instituciones españolas y presentando a España como ejemplo de falta de democracia en la que no existe -según ellos- la reparación de poderes, equiparándola a Turquía u otros países. Quiero dejar claro que España es un país democrático, homologable a cualquier modelo democrático de su entorno. Es un Estado democrático de Derecho con separación de poderes que nada tiene que ver con el franquismo con el que los mismos dirigentes independentistas comparan a la actual democracia española. Entre otras grandes diferencias, hay que recordar que en el franquismo nunca hubo separación de poderes, sino un solo poder -no elegido democráticamente- y división de funciones de este único poder. Todas estas acusaciones se enmarcan en la voluntad de liquidar lo que de manera despreciativa califican de “régimen del 78” en relación a la Constitución que ha ofrecido a los españoles y españolas más décadas en toda su historia de democracia, paz, estabilidad y progreso económico y social. Y por supuesto, en el caso de los catalanes y catalanas, mayor grado de autogobierno desde el 1714. Otra cosa distinta es no estar de acuerdo con alguna decisión judicial, discrepar de la impericia política de algún Gobierno o sostener la posibilidad y necesidad de mejorar la calidad de nuestra democracia.

Cerrando el paréntesis y recuperando las referencias al acceso democrático al poder de líderes de dudosas convicciones y comportamientos democráticos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2016 la victoria de Donald Trump se explica a menudo por la aparición del odio, la xenofobia, el supremacismo blanco y el nacionalismo. La democracia, al estilo Trump, se ha convertido en una relación entre el líder y las masas, en que la política ya no se vehicula a través de debates

parlamentarios sino a través de tuits cada vez más propensos a la mentira y a la descalificación.

Podríamos detenernos aquí y pensar que la actuación de Donald Trump es algo aislado, y que muy posiblemente un sistema tan rodado como la democracia americana ha de hallar mecanismos para frenar esas tentativas autoritarias. Pero no es así. Según Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, autores del celebrado ensayo “Cómo mueren las democracias”, el futuro de Estados Unidos tras el paso de Trump por la presidencia estará marcado por nuevos distanciamientos respecto de las convenciones tradicionales de la política, así como por una creciente guerra institucional, es decir, en una democracia sin “guardarraíles sólidos”, sin los tradicionales “checks and balances” a los que antes aludíamos.

Levittsky y Ziblatt nos describen con detalle lo que ha ido sucediendo en un estado como Carolina del Norte, hasta hace poco dotado de una economía potente y un sistema educativo ejemplar, factores que convertían dicho estado en un referente para el resto de estados sureños. Para nuestros autores, Carolina del Norte era un estado que, como microcosmos, reproducía la situación política del conjunto de los Estados Unidos, con una población diversa, mayoría demócrata en las ciudades y mayoría republicana en las zonas rurales. Sin embargo, la política de la última década se ha caracterizado por la desconfianza mutua, por las restricciones del gobernador republicano a programas como el “Medicaid”, que proveen de una atención médica asequible. Esa guerra sin cuartel se inició en 2010, cuando los republicanos se alzaron con el poder en la asamblea legislativa estatal. Un año después, se dividieron de manera distinta los distritos electorales, en una maniobra que se consideró un intento por dividirlos según la raza mayoritaria en ellos y concentrando al electorado afroamericano en un reducido número de demarcaciones. Ese reajuste permitió a los republicanos hacerse con nueve de los trece escaños en el Congreso estatal en 2012, a pesar de que los demócratas obtuvieron mayor número de votos.

Con ello, los republicanos consiguieron mayoría en ambas cámaras y un claro predominio en el tribunal supremo estatal. La asamblea estatal aprobó rápidamente una batería de medidas que dificultaba el voto, se redujo la posibilidad de voto anticipado y se recortó el número de colegios electorales en distritos clave. Cuando en 2016 el candidato demócrata a gobernador venció al gobernador republicano saliente, éste tardó meses en reconocer la derrota y, a días antes de su cese, los republicanos convocaron una sesión extraordinaria sorpresa de la asamblea legislativa estatal en la que se aprobaron numerosas medidas para reducir el poder del gobernador demócrata entrante. El Senado se otorgó el derecho de confirmar o no los futuros nombramientos y autorizó al gobernador saliente a convertir en funcionarios fijos a más de mil cargos políticos eventuales seleccionados a dedo, llenando de personas afines la estructura del poder ejecutivo. También se modificó la composición de los comités electorales

estatales competentes en materia de censo electoral, registro de votantes, horario de votaciones y configuración de los distritos electorales. Todo ello evidenció que la democracia americana era más frágil de lo que se suponía.

Y eso sigue aconteciendo y se está extendiendo como práctica en numerosos estados de la Unión. Hace apenas un mes, a principios de diciembre, la legislatura controlada por los republicanos de Wisconsin se apresuró para aprobar un paquete de proyectos de ley redactado a toda prisa que le quitaría el poder al gobernador y al fiscal general del estado. Asimismo, los republicanos de Michigan estaban intentando una maniobra similar para evitar tener que compartir el poder con los nuevos legisladores demócratas en enero. Así, los republicanos de Wisconsin están considerando impedir que el nuevo gobernador demócrata y el fiscal general puedan retirar la demanda interpuesta por el estado contra el Obamacare, aunque tanto el nuevo gobernador como el nuevo fiscal general ganaron sus respectivas elecciones con la promesa de retirar dicha demanda. Para evitarlo, los legisladores del Partido Republicano podrían facultarse para designar abogados para defender las leyes estatales, usurpando el papel del fiscal general. Y los poderes del gobernador sobre la ley estatal de identificación de votantes, la junta de desarrollo económico y los programas de beneficios podrían ser limitados. La legislatura también podría recortar la votación anticipada, vista como una ayuda a los demócratas, mientras el actual gobernador republicano todavía está en el poder.

En definitiva, hemos caído en esa deriva autoritaria y en manos del populismo. No se trata de que el populismo haya aparecido en nuestros días de manera súbita, sino que ya estaba ahí. Para Levitsky y Ziblatt, el sistema democrático americano se había ido corroyendo durante los últimos años, con una culpa compartida atribuible tanto a republicanos como a demócratas, porque dejaron de respetar esas virtudes intangibles que garantizan la democracia y que ellos cifran en la contención y la tolerancia mutua. Su desaparición ha creado un abismo en el funcionamiento del sistema y ha permitido la caída de la democracia en brazos del autoritarismo y del populismo. El populismo no es exactamente un sistema de liderazgo como el fascismo sino un nuevo lenguaje, una nueva forma de actuar directamente relacionado con la crisis económica y el auge de las redes sociales. El resultado es una nueva forma de ver las cosas, en la que la masa de individuos se contraponen a unas supuestas élites, en la que se insiste en el agravio y la racionalidad se sustituye por componentes emocionales, de grupo e identitarios, alejados de la racionalidad imprescindible para el sano desarrollo de la política.

Para nuestros autores, la determinación de si un líder actúa o no de manera autoritaria es fácil e incluso sistematizable: lo será si el líder rechaza o pierde el respeto a las reglas democráticas establecidas; si niega la legitimidad a los adversarios políticos; si tolera o fomenta la violencia y, por último, si manifiesta su predisposición a restringir o negar las libertades civiles de la oposición. A mi juicio,

no obstante, más allá de las amplias referencias a los EEUU de Trump, la conclusión generalizable más importante del ensayo de los dos profesores de Harvard es que las democracias no mueren ya, como solemos creer, a manos de hombres armados, sino que más a menudo se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables.

En un reciente e interesante artículo –como todos los suyos-- el profesor Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política en la Universidad del País Vasco, (que también participo en alguna ocasión en este encuentro internacional) afirmaba que “una democracia de calidad es más sofisticada que la aclamación plebiscitaria; ha de existir en ella espacio para el rechazo y la protesta, por supuesto, pero también para la transformación y la construcción; la democracia debe articular más complejidad institucional que aquella que permiten quienes la conciben únicamente como una relación vertical entre el líder y las masas. No existe una vida política sana ni se adoptan las mejores decisiones cuando se decide sin una buena información o mediante un debate presidido por la falta de respeto hacia la realidad. Tampoco existe una alta intensidad democrática cuando la ciudadanía tiene una actitud que es más propia del consumidor pasivo, como un público de voyeurs al cual arengar y satisfacer en sus deseos más inmediatos”.

Ante esta situación, quienes creemos en la política como un instrumento para la consecución del bien común, y quienes consideramos asimismo la democracia parlamentaria como el único sistema político que garantiza y promueve la libertad, los derechos humanos, la dignidad de la persona y las aspiraciones sociales de solidaridad y de justicia, tenemos la responsabilidad moral de impulsar el restablecimiento de la confianza cívica en la democracia. Por otra parte, el humanismo cristiano esta en condiciones de entender que la polarización de nuestras sociedades puede acabar con nuestra democracia y por ello defender siempre la necesidad del diálogo, la transacción, el pacto como divisas de la política. Conviene recordar a Machado en sus Proverbios y cantares: “¿Tu verdad? No, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”-

Ciertamente, estos propósitos no se consiguen sólo con declaraciones altisonantes ni con encendidas profesiones de fe. El humanismo cristiano sólo puede dejar huella en la convivencia cívica si es reconocido por sus obras, por su ejemplo, por su lucha constante en defensa de los valores, de la solidaridad y del bien común. Como nos recuerda el Evangelio de San Mateo, el humanismo cristiano ha de ser un árbol sano para dar frutos sanos, y en modo alguno puede invocarse como un pretexto para encubrir medidas que perjudiquen a las personas y a la sociedad. Nuestra primera misión es la de dar ejemplo y la de fortalecer nuestros principios, porque, como advertía el evangelista, “un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis.”¹

Ante todo ello, necesitamos recuperar la esencia del mensaje humanista. Si Maritain ya aludía al compromiso ineludible de los cristianos en la lucha contra la injusticia y en pro de la transformación de la sociedad, hoy debemos erigirnos en continuadores de dicho mensaje, adecuándolo a las necesidades de nuestros días. Pueden haber variado los escenarios, e incluso parecemos extremadamente complicados, pero no lo serán más que aquellos en los que Maritain o Mounier nos hacían sentir su mensaje profético. Ese mismo compromiso sigue plenamente vigente hoy, y corresponde a nuestra época hallar la manera de dignificar las condiciones vitales de la persona.

El mensaje universal y eterno del cristianismo se funda en la esperanza y en la capacidad de transformación del mundo en pro de la libertad y de la fraternidad humanas. No se trata de que los cristianos deban ser demócratas por ser cristianos, sino que han sido los valores esenciales del cristianismo y su humanismo inherente los que han guiado la humanidad hacia la democracia. Como cristianos, como humanistas, no debemos encerrarnos en la paz de nuestras torres de marfil, sino que somos personas en el mundo, y debemos inmiscuirnos en las controversias para facilitar el diálogo y el entendimiento en todos los grandes debates sociales, políticos, económicos y cívicos. Nuestros valores --y casi me atrevería a decir que sólo nuestros valores-- pueden guiar la sociedad de nuestro tiempo hacia la superación del despotismo económico, nada suave, que pretende regirnos, o de la vocación autoritaria que, sin reparo alguno, se adueña de muchos de los dirigentes actuales.

Defender el humanismo significa apostar por la política como un instrumento de servicio a la comunidad. La democracia no es nunca el problema, como tampoco lo es el respeto a los derechos humanos o la práctica de la solidaridad, sino que constituye la base de cualquier solución. Por ello, nuestro propósito es siempre la consecución de la justicia, la actuación al servicio de la libertad, la defensa de los más débiles y de las minorías, la búsqueda del bien común y, en definitiva, nos guiamos por una actuación fundamentada en la dignidad de la persona humana.

Y desde esa perspectiva, el humanismo sólo puede apostar por una centralidad radical. La centralidad no puede entenderse como una simple equidistancia entre extremos distintos, ni una posición ambigua situada entre el bien y el mal. La centralidad es otra cosa, muy distinta, que consisten en la capacidad para dialogar con todas aquellas personas y fuerzas capaces de realizar aportaciones al bien común. Significa que nuestra forma de entender la política sólo nos puede conducir a practicarla mediante el respeto al adversario y a sus ideas, viendo en él no el enemigo, ni el diferente, ni el crítico, ni el oponente, sino alguien con quien dialogar y debatir. El diálogo y el respeto constituyen la única vía para acudir al encuentro de ideas. La democracia actual se ha deteriorado por la radicalización en la diferencia, por la culpabilización del discrepante. No podemos ni debemos seguir así, sino que debemos ser ejemplo y modelo de política constructiva,

respetuosa y consecuente. Debemos explicar al ciudadano, tantas veces como sea necesario, que la política ha de ser un instrumento de progreso y de avance común, de reconciliación, de pacto y de rechazo de las propuestas extremistas. En la política democrática no existen más enemigos que los violentos, los intolerantes, los que persiguen corroer los derechos humanos y los que ven en los poderes del estado una vía para la codicia y la rapiña.

Como se ha dicho a menudo, “centralidad es constitucionalidad”, y comporta la protección y desarrollo de los derechos humanos y de las libertades y garantías fundamentales; supone, asimismo, el refuerzo consciente del sistema de partidos. Nuestros adversarios electorales no dejan de ser compañeros y hermanos, amigos, con los que debemos dialogar y construir espacios de consenso y de progreso común.

Todo ello debe repercutir también en una actuación inequívoca al servicio de los menos favorecidos. Sería inútil afirmar que defendemos la persona humana si no somos capaces de garantizar un mínimo de derechos a todas y cada una de las personas. La comunidad no es nuestro entorno de amigos ni nuestro círculo de fieles, de saludados o de conocidos. La comunidad, nuestra comunidad, se extiende a todo el género humano, sean cuales sean sus cualidades y sean cuales sean sus defectos. Dicho de una manera concisa, los derechos humanos no son los derechos de algunos, sino de todos, y un derecho que sólo se aplica a una parte de la población deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.

Por esa misma razón, la acción de los poderes públicos no puede consistir en trasladar a los diarios oficiales los deseos económicos de las elites. La política y las instituciones deben acreditar su compromiso social y especialmente su compromiso a favor de los más débiles. No se trata de considerar al mercado o al estado como enemigos del progreso humano; es más, una economía fundamentada en el mercado pero que permita la redistribución de riqueza, la movilidad y ascenso social, la igualdad de oportunidades, todo ello es necesario para el desarrollo humano y el progreso de las libertades. Pero las instituciones deben ser especialmente sensibles a las personas y familias en situación de fragilidad, de enfermedad, de minusvalía o de marginalidad. Debemos comportarnos como el buen samaritano que tuvo compasión y misericordia del pobre hombre que cayó en manos de salteadores y que, golpeado y abandonado a su suerte, no fue socorrido ni por el sacerdote ni por el levita. Si el buen samaritano pudo hacer eso por razón de su piedad hacia un desconocido, ¿qué no deberán hacer los poderes públicos que tienen encomendada la defensa del bien común? Respondiendo a las palabras de Jesús en esta conocida parábola, ¿quién es nuestro prójimo? Y, del mismo modo, ¿para quién deben trabajar unas instituciones regidas por el humanismo y los valores sociales?

Y, en definitiva, debemos impulsar la actuación democrática, conscientes de que las decisiones que afectan al bien común deben ser adoptadas por los ciudadanos, de manera responsable y mediante una opinión formada. Nuestro compromiso es hacer posible esa "opinión formada", y la vía para hacerla posible no es otra que el respeto mutuo, el ejemplo constante y la honradez en todos los ámbitos y situaciones. Así pues, los representantes políticos debemos ser líderes en el ejemplo y avanzados modelos de austeridad, de honradez y de responsabilidad. Nadie puede estar al servicio de los demás si se considera superior a sus conciudadanos o si no entiende su responsabilidad como una etapa transitoria en la que, por voluntad de sus iguales, se le ha conferido la oportunidad de trabajar en pro del bien común.

Nuestro trabajo no ha de ser el de convertirnos en elites directivas sino, sobre todo, generar grandes espacios para el encuentro, no sólo con quienes comparten nuestros valores, sino también con todas aquellas personas e ideologías que compartan nuestra aspiración por un mundo mejor y más libre.

Como recordaba hace unos minutos, el protagonismo de la democracia cristiana en la Europa de los años cuarenta y cincuenta se explica como reacción ética frente a los devastadores episodios totalitarios que habían asolado el continente. Tal vez ahora, en otra época y en otros escenarios, ese mismo estallido ético que representa una política fundamentada en los valores y en la defensa de la dignidad humana sean el antídoto y el remedio imprescindible para restablecer la salud de la democracia y devolver a los ciudadanos la confianza perdida. Pero debemos recordar que los desafíos actuales de la democracia no provienen sólo de las actitudes totalitarias sino, también, de la pérdida de sentido comunitario, del egoísmo consumista y del individualismo que sólo busca satisfacción a plazo inmediato.

Debemos trabajar no sólo para ser ejemplares sino también para generar en el seno de la sociedad una cultura política más compleja y matizada. Debemos rechazar la polarización y la radicalización y debemos esforzarnos para que no sea rentable electoralmente promover medidas de enfrentamiento y de confrontación. Para reforzar la democracia, debemos reinstaurar en ella y en la sociedad los valores humanistas, extender la participación política a todos los ámbitos posibles y reforzar el sistema de pesos y contrapesos que garantizaba los intangibles de la política. En definitiva, debemos dar respuesta a la complejidad actual de la sociedad y generar procedimientos rápidos de aprendizaje cívico. No se trata de hacer reformas administrativas ni de cambiar algunas leyes, sino de transformar la política para que sea capaz de sostener la democracia ante los desafíos actuales. No se trata de maquillar la vieja política, sino que debemos hallar caminos nuevos que permitan frenar el autoritarismo y la atomización social.

Si lo conseguimos, el humanismo social, el humanismo de inspiración cristiana, habrá vuelto a consolidar la democracia y a proporcionar a la humanidad un nuevo y esencial servicio.

Muchísimas gracias.

